

**JUICIO: SCAPOLATEMPO JORGE RICARDO ADAN c/ DENABAR S.A. Y OTROS
s/ ACCIDENTE DE TRABAJO. EXPTE: N°1201/10. RECURSO EXTRAORDINARIO
FEDERAL POR LA PARTE ACTORA.**

San Miguel de Tucumán, 28 julio de 2023

Corte Suprema:

I.- Vienen las presentes actuaciones ante este Ministerio Público Fiscal a fin de dictaminar respecto a la admisibilidad del recurso extraordinario federal presentado el día 14/06/23 por el abogado apoderado de la parte actora en contra de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán N° 1479 del 29/11/2022.

II.- La sentencia N° 1479 del 29/11/22 ha declarado inadmisibile y, en consecuencia, mal concedido el recurso de casación interpuesto por la actora, por considerar que el mismo no cumple con el requisito del art. 130 del CPL, es decir la sentencia no reviste gravedad institucional.

III.- El recurso extraordinario federal ha sido presentado tempestivamente. De la compulsa del sistema SAE se verifica que la parte actora ha sido notificada por el Juzgado de Paz de Cebil Redondo el día 27/02/2023 y el recurso ha sido interpuesto el 19/12/2022 a hs. 09:27.

Se dirige contra la sentencia definitiva emanada del superior tribunal de la causa, cumple con los requisitos formales exigidos por el reglamento aprobado por la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 4/2007, acompaña la carátula, el escrito no supera las carillas reglamentarias y, a su turno, las carillas no exceden la cantidad de renglones estipulados en la reglamentación. Constituye domicilio electrónico como lo exige la Acordada N° 3/2015 CSJN.

IV.- La parte recurrente se agravia en la interpretación que hace la Corte sobre la acreditación de la gravedad institucional, requisito establecido por el art. 130 del CPLT para la admisibilidad del remedio casatorio.

Sostiene que viola el principio propersona al interpretar que debe acreditarse gravedad institucional para la admisibilidad del recurso de casación laboral, pese a que no es requisito en la casación civil, y además incurre en arbitrariedad al no encontrar gravedad institucional pese a que se denuncia la violación del derecho de defensa y tutela judicial efectiva del dañado en tanto trabajador, menor de edad y

consumidor vulnerable y se mantiene la arbitrariedad en que incurrieron los tribunales inferiores.

Arguye que la sentencia no está fundamentada, con deficiente valoración probatoria en clara violación al derecho de defensa (art. 18 CN) y al derecho constitucional de debido proceso en su faceta de obtener sentencia de fondo (art. 18 CN) y de protección al trabajador (art. 14 bis y 75 inc. 22 CN).

Dice que el requisito de que la cuestión asuma gravedad institucional no es necesario en el caso de que se recurra sentencia definitiva. Por lo que hay dos interpretaciones, una interpretación sostiene que la exigencia de que el punto debatido asuma gravedad institucional está referida solo las sentencias que tengan la virtualidad de poner fin al pleito o hacer imposible su continuación y la otra es que la exigencia también comprende al supuesto en que se deduzca el recurso de casación en contra de una sentencia definitiva.

Por lo que interpretar lo último vulnera el principio propersona, que se trata de una norma de cierre o clausura, al estilo de la regla que todo lo que no está prohibido está permitido o que no hay crimen ni pena sin ley previa que lo contemple, que tiene su fundamento en el art. 29 CIDH. Como tal debe aplicarse siempre y no sólo en caso de duda, de allí una diferencia radical con el principio in dubio pro reo, el favor debitoris o el in dubio pro operario, ya que la CIDH determina que se debe aplicar incondicionalmente.

Manifiesta que igualmente la cuestión asume gravedad institucional ya que están en juego principios fundamentales de la Constitución Nacional como defensa en juicio, propiedad, libertad de prensa, familia, progreso, bienestar general, la autonomía de las provincias.

Finalmente se agravia de la sentencia de Cámara.

Formula otras consideraciones que se dan por reproducidas, cita jurisprudencia y propone doctrina legal.

V.- Es mi opinión que el recurso extraordinario federal es inadmisibile.

Efectivamente, la Corte interviene en el recurso extraordinario de casación sólo si está dirigido contra sentencias definitivas. En cuanto al supuesto de gravedad institucional este es exigido cuando la sentencia sea equiparable a definitiva y en el proceso laboral, el legislador además lo exige para las sentencias definitivas o equiparables tal (art. 130 CPL).

La inteligencia del art. 130 del digesto procesal laboral, responde a una serie de reformas introducidas en el fuero del trabajo a través de la ley 8969, que introdujo un sistema de doble instancia de revisión amplia a través del recurso ordinario de apelación. Sistema que no genera desigualdad ante la ley, ya que es aplicado por igual a todos los trabajadores; y tampoco es en sí misma y en general inconstitucional, ya que se trata de valoraciones de la legislatura local que forman parte de las atribuciones provinciales y del poder no delegado a la Nación.

Corresponde observar lo dispuesto en la sentencia CSJT, N° 1479 de fecha 29/11/2022: *"...aunque aquel se dirige contra una sentencia definitiva, en las concretas circunstancias del caso no se advierte que la cuestión debatida exceda el interés particular de los litigantes y atañea a la colectividad en su conjunto, vulnere algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, pueda resultar frustratoria de derechos de naturaleza federal o comprometa la regular prestación del servicio de justicia o de los servicios públicos, sin que el recurrente desarrolle razones suficientes, idóneas, que den cuenta de que alguno de los mencionados supuestos se hubiere configurado en el caso"*.

Cabe aclarar que en el sub lite debe aplicarse la versión del art. 130 del CPL introducida por Ley N° 8.969, que reza: *"Procedencia. El recurso de Casación sólo podrá deducirse en contra de las sentencias definitivas dictadas por la Cámara de Apelación del Trabajo y contra las demás sentencias de este tribunal que tengan la virtualidad de poner fin al pleito o hacer imposible su continuación, únicamente en la medida en que el punto debatido asuma gravedad institucional"*.

Si bien la sentencia cuestionada es definitiva en tanto se expide sobre la fundabilidad de la pretensión principal, en cambio, no se encuentra cumplido en la especie el otro extremo requerido por la mencionada norma, esto es, que la cuestión asuma gravedad institucional, ello así toda vez que el tópico debatido no excede el interés individual del recurrente ni de las partes ni afecta al de la comunidad (conf. CSJT: sentencia N° 739, del 11-8-2008, entre muchas otras).

De la confrontación entre el fallo impugnado y los fundamentos del recurso se colige, a la luz de los criterios expuestos precedentemente no surge que la parte recurrente demuestre que la sentencia en crisis le haya provocado un gravamen personal, concreto y actual no derivado de su propia actuación y la falta de sustento de la alegada arbitrariedad y la insuficiencia del libelo recursivo para provocar la apertura de la vía extraordinaria federal.

El recurso tampoco cumple con la exigencia de cuestión federal; en efecto, la materia de la causa está regida por cuestiones de derecho procesal común dentro del marco de un juicio laboral, insusceptibles de revisión por vía extraordinaria federal.

VI.- En definitiva, a criterio de este Ministerio Público Fiscal, el recurso extraordinario federal incoado por la parte actora en contra de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán N° 1479 del 29/11/2022, resulta inadmisibile.

Mi opinión.

p

Dr. EDMUNDO J. JIMENEZ
MINISTRO FISCAL
MINISTERIO PUBLICO FISCAL
TUCUMAN